

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, 11 de febrero de 2021.

Auto Interlocutorio Nro. 035

MAGISTRADO PONENTE: OMAR EDGAR BORJA SOTO

MEDIO DE CONTROL	REPARACIÓN DIRECTA
EXPEDIENTE	76001-23-33-000-2019-00650-00
DEMANDANTE	WALTER ROLANDO GÁLVEZ RENDÓN gerencia@calerogonzalez.com
DEMANDADO	MUNICIO DE PALMIRA Y SOLUTRAFFIC INGENIERIA S.A.S. notificaciones.judiciales@palmira.gov.co director@solutraffic.com
ASUNTO:	ADMITE DEMANDA

ANTECEDENTES

El señor Walter Rolando Gálvez Rendón a través de apoderado judicial, mediante el ejercicio del medio de control de Reparación Directa consagrado en el artículo 140 del CPACA, solicitó se declare a las demandadas MUNICIPIO DE PALMIRA y SOLUTRAFFIC INGENIERIA S.A.S. responsables del daño antijurídico que se le causó durante la celebración y ejecución del contrato de obra pública nro. 526 de 2017, en donde se vulneraron sus derechos protegidos mediante la patente de invención otorgada al demandante por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Igualmente solicita:

- La indemnización de los perjuicios patrimoniales por concepto de lucro cesante, correspondiente a lo dejado de percibir como titular del derecho de propiedad industrial.
- Se prohíba a SOLUTRAFFIC INGENIERIA S.A.S. continuar fabricando y comercializando los productos que afectan los derechos de propiedad industrial otorgados mediante patente.
- Que cesen los actos que constituyen la infracción, materializado en la utilización de los semáforos, retirándose los mismos, así como los demás materiales y medios que sirvieron su utilización.
- Se adopten las medidas necesarias para evitar la continuación o repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los semáforos patentados que se encuentren en propiedad de SOLUTRAFFIC INGENIERIA S.A.S., así como el cierre temporal o definitivo de la empresa.

Mediante auto de sustanciación nro. 405 del 16 de septiembre de 2019¹, se inadmitió la presente demanda para que la parte actora allegara la constancia de conciliación extrajudicial emitida por la Procuraduría Judicial correspondiente, así como el certificado de existencia y representación de la sociedad SEMINTEL S.A.S.

¹ Folios 49-52



Dentro del término legal conforme a la constancia secretarial que antecede², la parte demandante allegó escrito de subsanación³, en el cual anexo certificado de existencia y representación legal de la sociedad SEMINTEL S.A.S. y anexó nueva solicitud de medidas cautelares⁴.

Respecto al requisito de procedibilidad contemplado en el numeral 1 del artículo 161 del CPACA, insistió en que no es exigible cuando con la demanda se solicitan medidas cautelares de carácter patrimonial, citando un aparte jurisprudencial del Consejo de Estado y el artículo 245 de la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000.

Finalmente, adujo que las medidas cautelares que se solicitaron son especialmente aplicables para los casos de propiedad industrial en Colombia, situación que no se tuvo en cuenta al momento de estudiar la admisión de la demanda.

En el nuevo escrito de medidas cautelares, manifestó que con el fin de asegurar el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por las demandadas y con el fin de evitar se vuelva a cometer la infracción, se ordenen las siguientes obligaciones de hacer y no hacer, conforme al numeral 5 del artículo 230 del CPACA:

1. Se ordene al Municipio de Palmira, que no continúe realizando contratación directa para la adquisición o instalación de semáforos solares, o que utilicen el sistema de energía solar, con empresas que no tienen los derechos de propiedad industrial, y en general, con empresas a las que el titular de la patente no le ha cedido sus derechos de explotación comercial mediante las respectivas licencias.
2. Se ordene a la empresa SOLUTRAFFIC INGENIERIA S.A.S., que no continúe la fabricación y comercialización de los semáforos patentados por el demandante.
3. Se ordene a las entidades demandadas a la Constitución de una garantía bancaria por el valor total de la estimación razonada de la cuantía de la demanda.

Sobre las medidas cautelares de carácter patrimonial el Consejo de Estado, ha dicho⁵:

“Posteriormente, la Ley 1437 de 2011, mediante la cual se expidió el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en el inciso 2° del artículo 309 derogó expresamente el inciso 5 del artículo 35 de la Ley 640 de 2001, modificado por el artículo 52 de la Ley 1395 de 2010, haciendo obligatorio agotar el requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial, incluso cuando en la demanda se solicitaran medidas cautelares.

Sin embargo el Código General del Proceso en su artículo 6269 derogó expresamente la norma previamente mencionada e incluyó en el párrafo primero del artículo 509 lo siguiente:

² Folio 64

³ Folios 54-56

⁴ Folios 62-63

⁵ CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejero Ponente: HERNÁN ANDRADE RINCÓN Bogotá D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil diecisiete (2017) Proceso: 250002336000201601452 01 Radicación: 58018 Actor: CONSTRUCCIONES AR&S S.A.S. Demandado: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU Referencia: LEY 1437 DE 2011. CONTROVERSIAS CONTRACTUAL

“Artículo 590. Medidas cautelares en procesos declarativos. (...)

Parágrafo primero. En todo proceso y ante cualquier jurisdicción, cuando se solicite la práctica de medidas cautelares se podrá acudir directamente al juez, sin necesidad de agotar la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad”.

A su vez, en el artículo 613 ibídem estableció que en materia contencioso administrativa no sería necesario agotar el requisito de procedibilidad en los procesos en los cuales el demandante solicitara medidas cautelares de carácter patrimonial, la parte demandante sea una entidad pública o se trate de un proceso ejecutivo.

La Corte Constitucional en la sentencia C-834 de 2013 al estudiar la exequibilidad de la expresión “de carácter patrimonial” contenida en el artículo 613 de la ley 1564 de 2012, precisó:

“3.1. Contexto normativo del aparte demandado

Recuerda la Corte que ante la inexistencia de regulación específica por parte de la ley 1437 de 2011 –CPA y CCA-, la regulación aplicable en materia contencioso administrativa, conforme a la regla prevista en el artículo 1º de la ley 1564 de 2012, será la prevista por este último cuerpo normativo. En este sentido, existe una regla general prevista por la ley 1564 de 2012 en el parágrafo 1º de su artículo 590, disposición en que se consagró “[e]n todo proceso y ante cualquier jurisdicción, cuando se solicite la práctica de medidas cautelares se podrá acudir directamente al juez, sin necesidad de agotar la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad”.

Según el parágrafo primero del artículo 590 de la ley 1564 de 2012, si en cualquier jurisdicción se solicita la práctica de medidas cautelares, no será necesario agotar como requisito de procedibilidad la audiencia de conciliación.

Esta regla general no es de aplicación al procedimiento contencioso administrativo, puesto que la propia ley 1564 de 2012 prevé una regulación especial para esta jurisdicción, que se encuentra en el artículo 613 cuyo título es “AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL EN LOS ASUNTOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS”; dicha disposición prevé un trámite adicional cuando se realice audiencia de conciliación en materia contencioso administrativa –notificación a la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado- y, adicionalmente, que “[n]o será necesario agotar el requisito de procedibilidad en los procesos ejecutivos, cualquiera que sea la jurisdicción en la que se adelanten, como tampoco en los demás procesos en los que el demandante pida medidas cautelares de carácter patrimonial o cuando quien demande sea una entidad pública” –negrilla ausente en texto legal; el aparte subrayado corresponde al aparte demandado-.

El aparte demandado, al ser una excepción parcial a la regla general en materia contencioso administrativa –realización de audiencia de conciliación siempre que se trate de materias conciliables (artículo 161 de la ley 1437 de 2011)- implica el siguiente contenido: no obstante solicitar medidas cautelares, cuando éstas sean de carácter no patrimonial la parte demandante deberá realizar, como requisito previo de procedibilidad de la futura demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa, audiencia de conciliación extrajudicial, siempre y cuando se trate de un asunto conciliable.

Si se retirara del ordenamiento el aparte demandado, la excepción a la regla general que obliga a realizar audiencia de conciliación –es decir, la posibilidad de acudir directamente al juez en los casos en que se solicite medidas cautelares, artículo 590 del Código General del Proceso- se haría extensiva a los casos en que se solicite una medida cautelar de carácter no patrimonial”.

De igual manera, la Jurisprudencia de esta Corporación se ha manifestado en el mismo sentido, precisando que la posibilidad de no agotar el requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial es procedente siempre y cuando la medida cautelar solicitada sea de carácter patrimonial y, respecto del examen que debió realizarse de las medidas cautelares solicitadas para determinar si es necesario exigir el requisito de procedibilidad, dispuso:

“Así las cosas, el a quo no podía simplemente rechazar la demanda por la falta del requisito de la conciliación prejudicial, ya que la actora claramente había pedido que se decretaran unas medidas cautelares, situación que lo obligaba a realizar un estudio sobre las normas vigentes, incluyendo las concordancias entre C.P.A.C.A. y el Código General del Proceso, a fin de determinar si dicho requisito de procedibilidad era exigible en este caso particular y si las medidas solicitadas eran de carácter patrimonial, lo que evidentemente no se hizo.

Ahora, para la Sala ninguna de las cinco medidas cautelares contempladas en el artículo 230 del C.P.A.C.A., per se contienen un carácter propiamente patrimonial; por lo tanto el estudio debe hacerse respecto de los efectos que se producen al decretar alguna de esas medidas, los cuales eventualmente sí pueden generar una evidente consecuencia económica, que debe ser determinada por el Juez al momento de resolver sobre la admisión de la demanda”. (Subrayas del texto original)

Ahora bien, en el presente caso se solicita la reparación de los daños ocasionados por parte de los demandados por la supuesta infracción a la patente otorgada al demandante por la Superintendencia de Industria y Comercio, por lo que es necesario establecer que está trata de un derecho exclusivo que concede el Estado al creador de una invención, por el cual se impide a terceros no autorizados realizar actos de fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación del producto objeto de la patente o producto obtenido directamente por medio del procedimiento objeto de la patente.

De conformidad con lo anterior y una vez revisadas las medidas cautelares solicitadas por la parte demandante en escrito separado anexo a la subsanación de la demanda, se colige que estas van encaminadas a proteger los frutos económicos que provengan de la explotación comercial de la propiedad intelectual otorgada al señor Walter Rolando Gálvez Rendón por crear el “sistema de semáforos autosostenible y productor de energía”. Por lo tanto, de decretarse o no las medidas acarrearían consecuencias patrimoniales para las partes, y en ese sentido no es necesario cumplir con el requisito de la conciliación prejudicial.

Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que en jurisprudencia del Consejo de Estado se indicó que el derecho procesal sede al derecho sustancial, y por ende, no siempre la conciliación prejudicial es suficiente para rechazar un trámite judicial, pues iría en contravía de los principios de acceso a la administración de justicia y la tutela judicial efectiva.

Así las cosas y como quiera que se subsanó la demanda dentro del término legal y reúne los requisitos legales, se admitirá.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 806 de 2020, se requerirá a la parte demandante para que aporte la información y documentación señalados en la referida norma⁶.

En consecuencia, se;

R E S U E L V E:

PRIMERO: ADMITIR la demanda del medio de control **REPARACIÓN DIRECTA**, instaurada por el señor Walter Rolado Galvéz Rendón contra el **MUNICIPIO DE PALMIRA y SOLUTRAFFIC INGENIERIA S.A.S.** y en consecuencia dispone:

SEGUNDO: NOTIFICAR este auto al demandante en la forma prevista en el artículo 9 del Decreto 806 de 2020, quien podrá consultarlo en la página web: www.ramajudicial.gov.co.

TERCERO: No hay lugar a fijar gastos ordinarios del proceso, pues la notificación personal corresponde a la parte actora; no obstante, de requerirse expensas, éstas se fijarán en su oportunidad.

CUARTO: NOTIFICAR personalmente la presente providencia a las partes demandadas **MUNICIPIO DE PALMIRA, SOLUTRAFFIC INGENIERIA S.A.S.** y al señor **AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO** a los buzones de correos electrónicos creados por dichas entidades para efecto de recibir notificaciones judiciales de conformidad con lo establecido en los artículos 197, 198 y 199 del CPACA.

La parte demandante deberá remitir al correo electrónico rpmemorialestadmvcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co, dentro de los CINCO (05) DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación por estado de la presente providencia, la constancia de remisión efectiva de la copia de la demanda, sus anexos y del auto admisorio.

Hasta tanto no se alleguen las constancias anteriormente referidas, la Secretaría de esta Corporación no realizará la notificación personal a los demandados. El incumplimiento de esta carga procesal dará lugar a la aplicación del artículo 178 del CPACA.

QUINTO: A la entidad demandada **MUNICIPIO DE PALMIRA, INGENIERIA S.A.S.** y al señor **AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO** se les correrá traslado de esta demanda por el término de treinta (30) días para contestarla, proponer excepciones, pedir pruebas, llamar en garantía y en su caso, proponer demanda de reconvención, acorde con el artículo 172 del CPACA. Este plazo comenzará a correr al vencimiento del término común de veinticinco (25) días después de surtida la última notificación, como dispone el artículo 199 del CPACA.

⁶ - Canal digital donde deben ser notificadas las partes, sus representantes y apoderados, los testigos, peritos y cualquier tercero que deba ser citado al proceso.
- Anexos en medio electrónico, los cuales corresponderán a los enunciados y enumerados en la demanda.



SEXTO: ADVERTIR a las demandadas que, durante el tiempo para dar respuesta a la demanda, deberá allegar con la contestación, **el expediente administrativo que contenga los antecedentes de la actuación que se demanda** y se encuentre en su poder. La inobservancia de este deber constituye falta disciplinaria gravísima del funcionario encargado del asunto (artículo 175, parágrafo 1º del CPACA).

SÉPTIMO: Se advierte a los sujetos procesales que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto 806 de 2020, la contestación de la demanda y demás memoriales que se presenten durante el trámite del presente proceso, deberán presentarse al correo electrónico de la secretaria rpmemorialestadmvc Cauca@cendoj.ramajudicial.gov.co, con copia a los correos electrónicos de los demás sujetos procesales:

- Demandante (Walter Rolando Galvéz Rendón): gerencia@calerogonzalez.com
- Demandado (Municipio de Palmira): notificaciones.judiciales@palmira.gov.co
- Demandado (SOLUTRAFFIC INGENIERIA SAS): director@solutraffic.com
- Apoderado del demandado:

OCTAVO: RECONOCER PERSONERÍA para actuar como apoderado de la parte demandante al abogado FRANCISCO JAVIER CALERO ARANGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 94.476.142 y portador de la tarjeta profesional No. 263.495 del Consejo Superior de la Judicatura, en los términos y para los efectos a que alude el memorial poder presentado⁷.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR EDGAR BORJA SOTO
Magistrado

Firmado Por:

OMAR EDGAR BORJA SOTO

MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL

Despacho 008 Del Tribunal Administrativo Del Valle Del Cauca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

⁷ Folio 17
VoBoSecretario
Nathaligg

RADICACIÓN : 2020-00650-00
Medio de control : REPARACIÓN DIRECTA
Accionante : WALTER ROLANDO GALVÉZ RENDÓN
Accionado : MUNICIPIO DE PALMIRA Y OTRO



Código de verificación: **72f81480757c764a0da86a659e94ba5103093d47c11e488434ca1e5f4addf1f8**

Documento generado en 11/02/2021 11:26:41 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>